

Es sintomático que el presidente García se niegue a ser evaluado en los cien primeros días de su gobierno. No se trata solo de una vocación patrimonialista, como lo ha dicho bien Julio Cotler. La negativa obedece también a que el propio García es consciente de su pobre desempeño. Sin embargo, la evaluación es necesaria. Los cien primeros días de un Gobierno son premonitorios de los cinco años que vendrán. Si en la luna de miel con los ciudadanos, el Gobierno no despliega todas las energías y toda la imaginación política que la legitimidad recién obtenida le permite, lo que vendrá después será, sin duda, mediocre y aburrido.

En el tobogán conservador

El señor Alan García, candidato de la primera vuelta, se presentó ante el electorado como un futuro gobernante de ruptura frente al gobierno del presidente Toledo. Criticó el modelo económico, el abandono del agro, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, las exoneraciones de impuestos y la falta de una reforma tributaria, la ausencia de políticas sociales, la política laboral, la incapacidad de los organismos reguladores para controlar los precios excesivos de los bienes y servicios públicos, la injusticia de los *services*, el dispendio en el gasto público, la banalidad presidencial. El candidato García no tuvo inconveniente en presentarse como el mal menor frente a Lourdes Flores, la candidata derechista de Unidad Nacional.

«Los cien primeros días de un Gobierno son premonitorios de los cinco años que vendrán. Si en la luna de miel con los ciudadanos, el Gobierno no despliega todas las energías y toda la imaginación política que la legitimidad recién obtenida le permite, lo que vendrá después será, sin duda, mediocre y aburrido»



Foto CIES

Los cien primeros días de un Gobierno son premonitorios de los cinco años que vendrán.

El candidato García de la segunda vuelta fue bajando el tono. Les quitó el filo a las críticas radicales al Gobierno, especialmente las referidas al modelo económico, para entonar con el voto de la derecha y mantuvo solo las críticas moderadas. En la segunda vuelta, García dejó de presentarse como el futuro gobierno de ruptura para ofrecerse como el gobernante del cambio responsable. Se definió como el mal menor frente a Ollanta Humala, el candidato nacionalista.

1/ Profesor principal de las facultades de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Una vez en el Gobierno, García se olvidó del cambio responsable. Desde entonces administra con disimulo la continuidad. En corto tiempo se ha deslizado, aceleradamente, por el tobogán conservador. Este desplazamiento a la derecha no obedece solo a una involución conservadora de García, sino también a un mandato electoral y social de los sectores conservadores de las clases medias y altas. García, en realidad, se está sometiendo a los ajustados resultados de la segunda vuelta electoral.

Mi hipótesis es que el recorrido de este itinerario conservador no es casual. García lo trazó desde el momento en que definió su fórmula presidencial. La designación del vicealmirante (r) Giampietri era una invitación a la derecha conservadora y autoritaria a sumarse a su candidatura; y la nominación de la candidata a la segunda Vicepresidencia, por sus vinculaciones familiares, era un guiño al fujimorismo. La derecha entendió el mensaje políticamente cifrado y García se encargó de recordárselo a lo largo de la primera vuelta. Por medio de inteligentes movimientos tácticos, García comunicó a la derecha y a los poderosos intereses económicos, con razón, que si él no pasaba a la segunda vuelta, Ollanta Humala derrotaba a la candidata de la derecha en las elecciones de la segunda vuelta.

Este itinerario conservador no es, sin embargo, un lecho de rosas. Más temprano que tarde, los excluidos de siempre –de este Gobierno y los anteriores– se encargarán de señalarle al señor García que es un camino equivocado, al menos para ellos, que son la mayoría del país. En las ánforas cuando sean convocados, en las calles cuando quieran y en los medios cuando puedan, dirán que ellos (los excluidos) prefieren el cambio a la continuidad, que su situación es intolerable y que la justicia más elemental exige tomarlos en cuenta en la hora de gobernar. En ese contexto, el movimiento que desborda partidos e instituciones volverá como en los mejores tiempos de Toledo, y generará inestabilidad e ingobernabilidad.

Una nueva convivencia

García pasó ajustadamente a la segunda vuelta y su representación parlamentaria, elegida en la primera

«La carencia de una mayoría parlamentaria ha obligado al gobierno aprista a organizar una coalición informal con la derecha de Unidad Nacional y con el fujimorismo»



Foto CIES

El triunfo electoral en la segunda vuelta le dio legitimidad para gobernar, mas no subsanó la carencia de una mayoría parlamentaria que le diera gobernabilidad.

vuelta, era una segunda minoría. El triunfo electoral en la segunda vuelta le dio legitimidad para gobernar, mas no subsanó la carencia de una mayoría parlamentaria que le diera gobernabilidad. Esta es una de las desventajas de las segundas vueltas mediante elecciones generales. Si la segunda vuelta se hubiera llevado a cabo en el Congreso, como sucedía hasta 1962, García hubiera obtenido, al mismo tiempo, legitimidad y gobernabilidad y habría estado obligado a formar una coalición formal que sustentara su Gobierno.

La carencia de una mayoría parlamentaria ha obligado al gobierno aprista a organizar una coalición informal con la derecha de Unidad Nacional y con el fujimorismo. La informalidad de la coalición no niega, sin embargo, que ella exista y se exprese en las votaciones congresales sobre los asuntos importantes del Gobierno y en la elaboración de las agendas públicas. La coalición se expresa también en la conformación del equipo de Gobierno (especialmente del equipo económico), con el que al parecer se sienten identificados, en mayor o menor medida, los apristas, los de Unidad Nacional y los fujimoristas; así como, en la aplicación de las políticas públicas (especialmente de las políticas económicas) y en el reclutamiento de la clientela que engruesa la burocracia. No obstante, la informalidad de la coalición permite que sus integrantes defiendan su autonomía y aleguen que sus acuerdos, expresados en el equipo de Gobierno y en las políticas públicas, son meras coincidencias.

Mutatis mutandis, esta nueva coalición tiene ciertos aires de familia –en el contenido y en la forma– con la de 1956. Entonces la oligarquía conformó una alianza con el APRA. La oligarquía estaba al mando y el APRA estaba subordinado, a la inversa de lo que sucede en la actualidad. Como ahora, la coalición era informal, pero tenía plena vigencia en las Cámaras

«García, al parecer, tiene una gran obsesión como político: quiere pasar a la historia como el gran reformador del Perú. El problema es que, ávido de historia, siempre llega tarde a ella»

legislativas y en la política en general. Cuando la oposición de entonces acusaba al APRA de traición, este alegaba que no existía tal alianza porque no había un acuerdo oleado y sacramentado al respecto. Esa coalición fue bautizada por la oposición como el gobierno de la convivencia, un nombre que pasó a la historia, que se prolongó con pequeñas variantes hasta 1968. A pesar de que esa convivencia bloqueó todas las reformas reclamadas masivamente por las nuevas fuerzas sociales, permitió un pequeño y lánguido oasis democrático dentro del excluyente Estado oligárquico de entonces.

La oligarquía pasada y sus voceros han sido reemplazados ahora por el capital extranjero y local y por sus representantes sociales y políticos, y se ha configurado una nueva convivencia que, sin duda, define el contenido de las políticas públicas del Gobierno actual. Por lo que se ha visto en estos primeros cien días, esas políticas, lejos de postular una reforma o siquiera un ajuste del modelo, implican más bien su continuidad y la exclusión económica de la mayoría de los peruanos.

“El APRA es el partido conservador que el Perú necesita”, sostuvo Pedro Roselló, un hombre vinculado políticamente a Pedro Beltrán, dueño de *La Prensa*, refiriéndose a la convivencia de 1956. ¿Cómo calificar políticamente al APRA de esta nueva convivencia?

Un reformador frustrado

García, al parecer, tiene una gran obsesión como político: quiere pasar a la historia como el gran reformador del Perú. El problema es que, ávido de historia, siempre llega tarde a ella. En 1985 quiso hacer grandes reformas, le aburría terriblemente la agenda burocrática de todos los días: los aranceles, la política cambiaria, las tasas de interés, la marcha lenta del Estado y sus políticas, entre otros. La situación de entonces era que las grandes reformas con las que soñaron el APRA de los años 1930 y los partidos antioligárquicos de los años 1950 y 1960, ya las había realizado el general Velasco por la vía de la dictadura. Para no frustrarse como reformador,

ensayó la estatización de la banca y le fue pésimo. En los estertores de su gobierno, impulsó la regionalización, una experiencia interesante pero finalmente fracasada.

Algo similar le sucede en el año 2006. Llega al Gobierno con ansias reformadoras del modelo neoliberal impuesto por la dictadura de Fujimori, bajo el impulso y el monitoreo de los organismos financieros internacionales. Sin embargo, se encuentra con una economía de mercado blindada por leyes, reglas de juego aceptadas, el peso de los oligopolios, los convenios de estabilidad tributaria, por presiones de los grupos de interés y por los miedos de las clases medias y altas ante cualquier cambio que pueda poner en peligro sus pequeños o grandes intereses. García percibe que no es fácil reformar el modelo económico del que hizo cera y pabulo en la campaña. Ante la enormidad de la tarea, en lugar de asumirla como un gran desafío, se amilana y retrocede. Deja que la derecha y los grandes grupos de interés sigan manejando la economía de mercado, que acepta su propia autorregulación pero que excluye la autoprotección de la sociedad. Adiós a la reforma tributaria, adiós a la reforma laboral, adiós a las políticas sociales agresivas de lucha contra la pobreza, adiós a la socialdemocracia, adiós, incluso, al liberalismo con equidad.

Vistas así las cosas, el programa del gobierno aprista queda sumamente acotado y recortado. Dado el funcionamiento de la economía, los privilegios, las desigualdades tienen que permanecer intocadas, García se concentra en lo político y en lo social, en lo que tiene impacto, no en el estómago ni en la mente, sino en la pupila de la gente. La propuesta de la ‘Sierra Exportadora’, en este esquema, es un juego en cancha chica, casi al margen de los intereses del modelo económico.



Al parecer, el presidente García percibe que no es fácil reformar el modelo económico.

Foto CIES

Incluso en estos campos –lo político y lo social–, las propuestas son muy limitadas. Tan limitadas que hasta la derecha acicatea al Gobierno, exigiéndole reformas y pidiéndole que abandone la pirotecnia verbal. De hecho, los anuncios y las medidas más interesantes se dirigen al campo de la descentralización, a las impactantes políticas de austeridad, a los anuncios de reforma judicial. Es poco lo que sabemos de la reforma del Estado que propondrá el gobierno aprista. La derecha continúa, como siempre, exigiendo un Estado chico, barato y abstencionista. Los de abajo quieren, en cambio, un Estado que los incluya como Estadonación, que funcione con eficacia y transparencia como administración pública y que ofrezca garantías e igualdad jurídica como sistema legal.

Sin recursos, sin reforma tributaria, poco se puede hacer en el campo social. ¿Cómo se puede luchar contra la pobreza, si se mantienen los convenios de estabilidad tributaria y las exoneraciones impositivas y si la presión tributaria en el Perú no llega al promedio de América Latina? El gobierno aprista ha renunciado a una de las prerrogativas que tiene todo poder político legítimo: el derecho a la extracción de recursos de la población sobre la que tiene jurisdicción. Se ha limitado a pasar el sombrero entre las grandes empresas mineras, de las que ha obtenido la promesa de entregar S/. 2.500 millones en cinco años, monto que el gobierno de Fujimori gastaba en agresivas políticas sociales clientelistas cada año, desde 1993 en adelante.

El programa sostenible del Gobierno ha sido reemplazado por la política de los *shocks*, esto es, por la improvisación y las ocurrencias del momento. El Presidente habla del *shock* de inversiones (públicas y privadas), del *shock* descentralizador, del *shock* de inversiones en educación, etc. Espero que de tanta política de *shock*, los peruanos no amanezcamos un mal día también en

shock y traumatizados. La palabra *shock* en labios de García tiene, además, connotaciones psicoanalíticas, cuyo análisis dejo en las sabias manos de mis amigos Max Hernández y Jorge Bruce.

El presidencialismo retórico

En el primer gobierno aprista, García ejerció un presidencialismo plebiscitario. Fue una persona que decidía y obtenía su legitimidad de la plaza pública, de las masas y de los famosos balconazos. Sus decisiones eran de izquierda, para enfrentar la crisis económica de entonces, y de derecha, para enfrentar el terrorismo. En cambio, en el actual gobierno aprista, García ejerce un presidencialismo retórico, que no obtiene su legitimidad de la plaza pública, sino de su inserción en la política como espectáculo y de su capacidad para convencer al auditorio mediante los medios de comunicación. Tanto el presidencialismo plebiscitario como el retórico proceden de y se emparentan con el tronco autoritario, y se caracterizan por un cierto desapego a la ley.

La veta autoritaria se expresa en la forma en que trata y maltrata a sus ministros que, en la tradición presidencialista, son obedientes secretarios y a quienes públicamente ordena y llama la atención. García quiere transmitir la imagen de un presidente hiperactivo, trabajador, austero, atento a las demandas que vienen de abajo, pero su excesivo protagonismo obstruye las iniciativas y el desempeño de sus propios ministros y funcionarios, y genera confusión e ineficacia.

La incapacidad de García para desarrollar políticas de fondo, lo induce a desplegar políticas impactantes en la forma. Anda en busca de lo popular y lo populachero, y transmite la impresión que quiere acompañar al pueblo en sus alegrías y en sus iras. Eso explica las propuestas de pena de muerte para los violadores y asesinos de niños y niñas, para los terroristas, la tolerancia cero para los camiones-ómnibus y para los malos transportistas.

«García quiere transmitir la imagen de un presidente hiperactivo, trabajador, austero, atento a las demandas que vienen de abajo, pero su excesivo protagonismo obstruye las iniciativas y el desempeño de sus propios ministros y funcionarios...»



Sin recursos y sin reformas tributarias, poco se puede hacer en el campo social.

Estas políticas de artificio lo convierten, en realidad, en un Presidente-luciérnaga: brilla pero no ilumina. Con estas propuestas apuradas, García olvida que la democracia no se rige solo por la regla de la mayoría, sino también por la regla de reglas: la Constitución, que se niega a someter los derechos fundamentales a la voluntad cambiante de la mayoría.

En este sentido, García disputa a los medios la capacidad de formular la agenda política por el lado más banal y superficial. Por desgracia, casi todos los políticos caen en el mismo juego, incluidos sus ministros, entre quienes hay gente seria y muy calificada.

La división real de poderes

Más allá de la división formal y funcional de poderes, en estos cien días de gobierno aprista se ha configurado una división real de tres poderes: el poder económico, manejado por la derecha y por sus poderes fácticos empresariales; el poder político, encargado de la ley, la justicia y las políticas sociales en manos del APRA; y el poder coercitivo, por ahora bajo la dirección de dos independientes.

El poder que tiene y muestra casi total autonomía para funcionar es el poder económico que, bajo el manto de una supuesta autorregulación del mercado, es el reino de los más fuertes y el cementerio de los débiles. En realidad, la autorregulación del mercado sin autoprotección de la sociedad, desde el punto de vista político, es injusto; desde un punto de vista del derecho abstracto, es un crimen en el sentido hegeliano del término porque implica engaño, desconocimiento de derechos y violencia. Los apóstoles de la economía de mercado a ultranza tienen que consultar a Karl Polanyi, para aprender en qué condiciones funcionó la autorregulación de la economía liberal del siglo XIX.

El poder político funciona acotado y limitado por el blindaje de la economía de mercado. Bajo la poderosa batuta de García, tocan su partitura con cierta creatividad y eficacia desigual Mercedes Cabanillas, la presidenta del Congreso, y Jorge del Castillo, el primer ministro. Cabanillas quiere, al parecer, que el Congreso sea una institución ágil y eficaz; sin embargo, eso requiere el apoyo de la derecha, de los fujimoristas y de los tráfugas de las filas de Unión por el Perú (UPP) y del nacionalismo. Estos apoyos desdibujan sus buenas intenciones. Dentro de las reglas de juego político del gobierno aprista, Jorge del Castillo es, sin duda, el que mejor desempeño tiene porque ha manejado el día a día con inteligencia táctica y ha sacado al Gobierno de serios aprietos. A medida que García se dedique a fondo a las polí-



Foto CIES

En estos cien días de gobierno aprista se ha configurado una división real de tres poderes, el económico, el político y el coercitivo.

ticas sociales, es probable que el Congreso adquiera más autonomía y, por el contrario, la presidencia del Consejo de Ministros, mayor dependencia.

En el poder coercitivo se están produciendo, al parecer, tensiones y acomodados. Por ahora existe la voluntad política presidencial de que las Fuerzas Armadas (FF AA) y Policiales estén bajo la dirección de los civiles. Debido a su experiencia de gestión estatal, Alan Wagner está ordenando la casa con cierto éxito. Pareciera que las pugnas de los mandos militares por controlar a las FF AA y por los ascensos han sido superadas. Es posible que Alan Wagner logre imprimir a las instituciones castrenses modernidad, profesionalismo y disciplina. De ese modo, si bien contribuye a resolver los problemas de organización interna de las FF AA, no resuelve el problema de fondo: el papel político que ellas han desempeñado y desempeñan, así como su relación con los civiles. La solución de este problema no depende tanto de los militares como de los civiles. La histórica sobre-presencia de los militares en la vida política del país revela no tanto la ambición de los uniformados, como el déficit político de los civiles.

«El poder político funciona acotado y limitado por el blindaje de la economía de mercado. Bajo la poderosa batuta de García, tocan su partitura con cierta creatividad y eficacia desigual Mercedes Cabanillas, la presidenta del Congreso, y Jorge del Castillo, el primer ministro»

A medida que el Perú cuente con un sistema político que funcione y un sistema de partidos consolidado, la importancia política de las FF AA será cada vez menor. Desgraciadamente, esta posibilidad es remota. Lo más posible es que, ante situaciones de ingobernabilidad, se apele otra vez a los mandos militares, se desplace a los civiles que hoy están al mando y se coloque allí a oficiales en situación de retiro, que esperan ansiosos volver a la actividad represiva.

En la búsqueda de amigos y enemigos

Desde la campaña electoral, cuando señaló con claridad quienes eran sus enemigos y quienes, sus amigos, García definió el esquema político básico de su política exterior. Sus criterios ordenadores, al parecer, han sido el modelo económico y el funcionamiento democrático de los países. Esos criterios lo condujeron a ubicarse, desde el primer momento, en el conjunto de países latinoamericanos gobernados por la izquierda *light*, a considerarse aliado de los gobiernos neoliberales y a confrontar agresivamente a la izquierda dura con rasgos autoritarios.

Por medio de la confrontación abierta con Chávez, García busca varios objetivos. En primer lugar, erigirse en líder continental democrático que está dispuesto a frenar la voluntad de expansión del chavismo en América Latina. En segundo lugar, presentarse como el aliado más fiel y más firme de los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos en el continente. En tercer lugar, combatir a los amigos peruanos de Chávez, mediante la convocatoria de todos los miedos y demonios posibles.



Foto CIES

Desde su campaña electoral, el presidente García definió con claridad el esquema básico de su política exterior.

«A medida que el Perú cuente con un sistema político que funcione y un sistema de partidos consolidado, la importancia política de las FF AA será cada vez menor. Desgraciadamente, esta posibilidad es remota»

Dentro del conjunto de países gobernados por la izquierda *light*, García privilegia las relaciones con Chile en América Latina y con España en Europa, con el objetivo de llegar a acuerdos económicos y políticos de mutuos beneficios. Con respecto al anterior Gobierno, esta política significa un viraje en la conducción de la política exterior con Chile. Se establece un Acuerdo de Complementación Económica y se acuerda que los cancilleres y los ministros de Defensa se reúnan periódicamente, para evaluar la marcha de las relaciones entre ambos países. A España, se le garantiza la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras y se le pide mayor apoyo a nuevas inversiones en el Perú.

Con los Estados Unidos, García pretende firmar acuerdos políticos y económicos en torno a los problemas de la coca, del narcotráfico y del TLC. Con respecto al primer punto, el Presidente recoge la política de la responsabilidad compartida, acepta la extradición de los narcotraficantes vinculados a los carteles de la droga para ser juzgados en los Estados Unidos, y plantea nuevas políticas crediticias y de mercado para reducir las áreas sembradas de coca. En cuanto al TLC, el Gobierno está haciendo grandes esfuerzos para que la *implementation act* ingrese en la agenda del Congreso norteamericano, cuya composición política acaba de cambiar con el triunfo contundente de los demócratas, que son más renuentes a firmar tratados de libre comercio. En esta difícil tarea desempeñan un papel importante Felipe Ortiz de Zevallos, el nuevo embajador del Perú ante el Gobierno de los Estados Unidos, y Hernando de Soto, el representante personal del Presidente para estos fines y la mercancía intelectual peruana que mejor se vende en el mercado norteamericano.